

dos catalanes (1), pidiendo quedara suspendida la discusion del proyecto de ley, hasta saber la opinion pública de sus provincias, áun cuando desde luego se tratara de reformar los enjuiciamientos. Estériles fueron los esfuerzos del Sr. Valle para conseguir alguna tregua en aquella discusion, y áun cuando pronunció un buen discurso, solicitando corto tiempo para pedir instrucciones á los obispos, cabildos y diputaciones de su país, no logró el breve plazo de unos dias, que necesitaba. Razones hubo que no podían hacerse públicas; pero fácilmente comprendidas por quienes reflexionen que la existencia del Santo Oficio fué siempre un formidable obstáculo suscitado por la Iglesia contra sus enemigos. Notorio es que la Inquisicion se estableció en España para reprimir los excesos de los judaizantes, moriscos y demas sectarios. No se ignora que dicha institucion evitó en los siglos XVI y XVII la propaganda en nuestra patria de los errores luteranos, y que en el siglo XVIII presentó el impedimento que le permitieron los regalistas contra la introduccion de la masonería y libros de la enciclopedia incrédula y blasfema con que depravados escritores intentaban destruir la verdadera fe. Con el ejército invasor francés se inundó España de estos libros, y únicamente el Santo Oficio podía remediar el mal; pero la extincion de sus tribunales estaba decretada en secretos conciliábulos. La comision de Constitucion habría desempeñado bien su cometido, proponiendo medios que armonizasen los procedimientos jurídicos con aquellos artículos del nuevo código en que pudo temer discordancia; pero una mayoría, exagerando su oficiosidad, propuso reemplazar al Santo Oficio con tribunales llamados protectores de la Religion. Título impropio cuya inexactitud se opone al buen sentido, habiendo en sus términos evidente contradiccion, sino es que se quiso consignar un gravísimo error. Todo tribunal ejerce jurisdiccion y administra justicia; en este concepto, los proyectados tribunales protectores no podían tener condicion de tales, sin el derecho

(1) Los diputados firmantes fueron D. Jaime Creus, D. Francisco Morros, D. Félix Aytes, el Marqués de Tamarit, D. Ramon de Lladós, D. Juan Bautista Serres, D. Juan de Valle, D. Francisco de Papiol, D. José de Vega Senmanat, D. Ramon Lázaro de Dou, D. Francisco Calvet y Ruvalcava.

esencial á su institucion. Las autoridades protectoras defienden y socorren á la Iglesia, sin ejercer en ella jurisdiccion, y como despojados de esta facultad, no son posibles los tribunales, resulta la contradiccion clara y evidente. Mas el absurdo é impropiedad científica de la denominacion consignada en el proyecto de ley se hace más notable, reflexionando que si los proyectados tribunales eran eclesiásticos, carecian las Córtes de potestad para crearlos, y si eran civiles no podían dispensar su proteccion juzgando causas de fe, sino auxiliando con la fuerza de su brazo secular, para el cumplimiento de las sentencias; y por consiguiente, á ninguna potestad se da nombre de tribunal, cuando no juzga ni ejerce jurisdiccion, y limita sus atribuciones á prestar auxilios. El poder legislativo dicta leyes, el judicial se ocupa en su cumplimiento, y el ejecutivo acerca de su aplicacion. Este es el que ejerce atribuciones protectoras; pero sin meterse á decidir sobre la observancia de las leyes, cuyas violaciones declara el poder judicial, constituido en tribunales. La potestad civil puede y debe promulgar leyes protectoras de la Religion; pero no debe ni puede legislar en lo referente á negocios eclesiásticos. La proteccion corresponde al poder ejecutivo, y no se dispensa juzgando, sino auxiliando á los tribunales eclesiásticos en quienes reside exclusivamente la potestad judicial sobre negocios de su carácter privativo. El auxilio que los poderes seculares prestan á la verdadera Religion no les da derechos jurisdiccionales sobre ella, ni sobre su régimen disciplinario. Una soberanía que Dios ejerce en este mundo por medio de su Vicario, no admite imperio ni mando de personas extrañas á dicha delegacion, ni áun bajo el pretexto de ayudar con la fuerza exterior, para que las disposiciones eclesiásticas sean obedecidas. En el mismo caso estaban los proyectados tribunales protectores, pues áun cuando sus jueces fueran eclesiásticos, procedía su delegacion de un origen ilegítimo, cual era la potestad secular de aquellas Córtes. Y si la jurisdiccion de dichos tribunales se limitaba únicamente á la parte civil, quedaban sus facultades más importantes desatendidas, pues el juicio de doctrina en este caso no tenía jueces competentes. Así, pues, la comision cometió su error primero en la denominacion que aplicó al proyecto de ley, siendo fácil de adivinar que ni áun sus amigos podian aprobarle sin variantes

esenciales. Y esto es lo que se ejecutó, acordando modificaciones que hicieron desaparecer la idea de semejantes tribunales.

En el cap. I del proyecto empezó la comision proponiendo que se restableciera la ley 2.^a, tit. 26, Part. 7.^a, dejando á los obispos sus facultades expeditas para conocer sobre asuntos de fe, y concediendo á los jueces legos el derecho de «... declarar é imponer á los herejes las penas que señalan las leyes.» Ordenaba la disposicion 3.^a que los cuatro prebendados de oficio de las catedrales, ó en su defecto algun otro canónigo, licenciado en cánones ó teología, fueran consiliarios del juez eclesiástico, y calificadores para las doctrinas denunciadas, y prevenia el siguiente artículo que dichos consiliarios concurriesen con el obispo á la formacion del sumario y demas diligencias hasta la sentencia, «..... poniendo al márgen de los provehidos su asenso ó disenso.» Las disposiciones 7.^a, 8.^a, 9.^a y 10.^a proponían que, fenecido el fuero eclesiástico, se pasara testimonio de la causa al juez secular para la imposicion de pena y determinar lo relativo á las apelaciones y recursos de fuerza. No consideraron los autores del proyecto que al ejercicio de las facultades canónicas delegadas por el Pontífice en jueces privativos concurrían los Obispos, ni reflexionaron que éstos no pueden recibir de la potestad secular reglas para el ejercicio de su ministerio.

En el cap. II se dictan disposiciones sobre la prohibicion de libros, cuya propaganda debían vigilar los poderes seculares. Mas el segundo artículo previene á los obispos que den ó nieguen su permiso para imprimir dichos escritos; facultad que ellos tienen sin que les sea necesaria concesion alguna del poder civil. No pueden los diocesanos recibir del Rey ni de las Córtes unas atribuciones inherentes á su sagrado ministerio. El proyecto de ley hace grave ofensa á la jurisdiccion episcopal, imponiendo á nuestros prelados cuatro calificadores, cuyo dictámen debe ser el fundamento de su resolucion para negar ó conceder la licencia solicitada; y consigna dicho artículo además, cierta prevencion ociosa y ofensiva para los obispos, determinando lo que juzga como un abuso de su autoridad. El juicio eclesiástico sobre la prohibicion de libros se sometió al dictámen del Consejo de Estado en el art. 4.^o, y el 5.^o determinaba un trámite preciso para dar carácter legal

á dicha prohibicion, que era el acuerdo de las Córtes. Crearon además una junta de personas elegidas por el Consejo de Estado, á cuya critica debía someterse la resolucion de los jueces eclesiásticos, supuesto que el Consejo estaba en la obligacion de exponer su dictámen sobre la lista de libros prohibidos por el obispo, despues de oido el juicio que formara la referida junta. Así, pues, nada significaban las sentencias de los prelados diocesanos sobre libros que juzgasen merecedores de prohibicion, debiendo buscar la conformidad de jueces legos, como el Consejo de Estado y las Córtes. En estos poderes constituyó el proyecto la facultad de prohibir los escritos contrarios á nuestra santa fe católica, y á semejante forma de juicio llamaban tribunales protectores de la fe, pretendiendo con este raro invento sustituir al Santo Oficio.